

SEMANARIO JUDICIAL.

AMPARO.

Juzgado de Distrito de Coahuila: Juicio promovido por el Lic. D. Ignacio Galindo, en representacion de D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, contra los comisarios de policia de San Juan Bautista, San Lorenzo y Colonia de San Pedro, por violacion de garantias é invasion de la esfera de la autoridad federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el Lic. D. Ignacio Galindo se ha presentado á ese Juzgado, en representacion de la Sra. D^a Luisa Ibarra, interponiendo el recurso de amparo contra los Jueces auxiliares de San Juan Bautista, San Lorenzo de la Laguna y Colonia de San Pedro, por creer violadas en su poderdante las garantias que otorgan los art. 16 y 27 de la Constitucion, y por haber invadido éstos la esfera de la autoridad federal.

Los hechos á que se refiere el quejoso para apoyar su solicitud son los siguientes: Que en ese Juzgado de Distrito hay pendiente un juicio de apco de las haciendas de los Hornos, de San Lorenzo de la La-

guna y San Lorenzo de Parras, que pertenecen en propiedad á la Sra. Ibarra: Que por Orden de 24 de Diciembre de 1857, comunicada al gobierno de Coahuila, mandó entregarle dichas fincas con la expresa y terminante prevencion de que se dictaran las disposiciones conducentes, segun consta en una copia certificada que obra en el expediente de apco, á fin de que fuera protegida en el goce de ellas: Que conociendo vd. en ese juicio como único Juez competente, cualquier derecho de los particulares, tienen que deducirlo ante vd. mismo, segun lo prevenido en el art. 5º de la ley de 13 de Marzo de 1857: Que los que se han considerado interesados en la cuestion de apco, como son los denunciantes de San Juan Bautista, San Marcos, Colonia de San Pedro y promotores de la creccion en villa de San Lorenzo de la Laguna, han hecho algunos sus gestiones ante vd., y otros por lo menos, han visto al personal del Juzgado, practicar la inspeccion de aquellos terrenos en Julio del año próximo pasado, no teniendo por esta razon escusa para desconocer su autoridad, violando las garantias individuales que aseguran la Constitucion general de la República y particular del Estado, é invadiendo la esfera de la auto-

ridad federal, por los acontecimientos que han pasado en la Laguna de Orden de las autoridades allí establecidas, y que se refieren: á que estando en posesion la Sra. Ibarra de la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, que tiene arrendada y entregada á D. Gabino San Miguel, el dia 1º del mes pasado se lo notificó al arrendatario por la autoridad política de dicha hacienda, que debia desocuparla, cosechados los frutos de esta última siembra, en virtud de una acta que corre agregada á fojas 13 de este expediente, en la que se desconoce á D. Gabino San Miguel como arrendatario de dicha hacienda, y se declara que todos los vecinos de San Lorenzo sigan en posesion de sus labores sin pagar partido ni renta de ninguna especie, hasta que el gobierno del Estado dé un arreglo favorable á la cuestion: A una reunion armada que encabezada por la autoridad política de San Marcos, desalojó á D. Francisco Santurtun del rancho de San Ignacio, y tomando posesion de él la autoridad de la Colonia de San Pedro, procedió á repartir algunas de sus tierras y que igual cosa se hizo con el rancho de la Providencia; y por último, que los denunciante de San Juan y de San Marcos que la autoridad federal habia desahuciado por dos veces, se reunieron en los últimos dias del año pasado y haciendo nuevas gestiones ante la autoridad política de San Marcos que desempeñaba Luz Cázares, éste los declaró dueños de los referidos ranchos de que es arrendatario D. Jesus Reina, impidiéndole que sus parcioneros le pagaran la porcion de frutos convenida, y no dejándolo ocupar mas tierra de la que cultivaba. Todos estos actos, dice el quejoso, han pasado á vista de la autoridad política de Matamoros, y que de ellos tiene conocimiento el Gobierno sin que se haya dictado una sola providencia para reprimir á los agentes que allí representan á la administracion.

Corrido traslado á este Ministerio para secretar acerca de la suspension del acto

reclamado, lo evacuó pidiendo se desechara la solicitud del Sr. Galindo, dejándole á salvo sus derechos para que entablara la accion que corresponde contra las que se dicen autoridades políticas, pues consideraba que si la Sra. Ibarra habia sido perturbada en el goce de sus propiedades, no habia sido por autoridades propiamente tales."

Estos hechos á que se contrae el Sr. Galindo, se encuentran casi probados del todo, en virtud de los informes rendidos por los Jueces auxiliares y por las actas que corren agregadas. Si el Promotor se dejara llevar de sus sentimientos, desde luego propondria á vd. que la Sra. Ibarra fuera protegida en la posesion y goce de sus propiedades; pero fiel observante de la ley, no puede ni debe separarse de ella, y por esto es que para apoyar su anterior dictamen, se vá á proponer ahora examinar las siguientes cuestiones:

Primera: ¿á qué autoridades se refiere el art. 1º de la ley de amparo?

Segunda: ¿los llamados Jueces auxiliares están investidos de alguna autoridad por las leyes generales ó particulares del Estado?

Tercera: ¿procede ó no al recurso de amparo?

Contrayéndose á lo primero, es su opinion que al hablar la ley de *cualquiera autoridad*, no por esto se refiere á todos aquellos que ejerzan alguna facultad ó poder, sino tan solo á los que se encuentran investidos con el carácter de autoridades legales, y que ejercen por lo mismo jurisdiccion legislativa, administrativa ó judicial: á aquellos que estando encargados de regir la sociedad, tienen limitada por la ley sus atribuciones y determinada la forma con que deben ejercerlas.

Esta division de la Soberanía en los términos que he dicho, está consignada en el art. 50 de la Constitucion general, y los Estados aunque libres y soberanos en lo que concierne á su régimen interior, no pueden

separarse de estas bases por estar unidas en una federacion establecida segun los fundamentos de esa suprema ley, (art. 40 de la misma).

Es por lo mismo fuera de duda que cualquiera autoridad ha de pertenecer á alguno de los tres órdenes establecidos: En cuanto al legislativo y judicial, la cuestion no ofrece dificultades, pues nadie pondrá en duda que desde el Juez instructor, y de aquel que dirime las controversias de poca cuantía, hasta el Magistrado que está encargado de fallar en última instancia, son autoridades propiamente tales, porque ejercen una jurisdiccion determinada por la ley y señalado el modo con que deben ejercerla.

Otro tanto sucede respecto del poder legislativo; pero no pasa lo mismo á quien se ha concedido la alta mision de ejecutar las leyes. Siendo sus atribuciones tan varias, tan extensas, no es posible que la administracion por sí sola atienda á los diversos objetos que le están encomendados: estando encargados de velar por la seguridad, por el orden y conservacion de la salud pública, procurando el cumplimiento y ejecucion de las leyes, y en fin, por todo lo que necesita la sociedad, no puede ejercer su benéfica influencia en una grande extension territorial, sin valerse de una multitud de agentes ó empleados á quienes se les revisa de cierto poder ó facultad. ¿Pero se podrá decir que todos esos empleados tienen el carácter de autoridades? Evidentemente que no; pues la mayor parte de ellos nada determinan de por sí respecto de los negocios propios de la administracion. La policía, los que están encargados de recaudar inmediatamente las contribuciones, los empleados secundarios de las secretarías de Gobierno, Gefaturas de Hacienda, de Aduanas y de tantos y tan diversos ramos, que seria largo enumerar con exactitud, si bien tienen demarcada por la ley sus facultades y deberes, no pueden hacer otra cosa que obedecer las órdenes de su superior,

y no debe por lo mismo considerárseles como á las autoridades á que se refiere la ley de amparo.

Solo contra las personas que están investidas de verdadera autoridad, se debe promover este juicio, y esto en el caso de que al violar una garantía procedan con ese carácter, pues que si lo hacen como particulares, tan solo se podrá intentar la accion que corresponda ante los tribunales comunes. Si un Juez ó un Gobernador, ó cualquiera otra autoridad, investidos de ese carácter ocupan la propiedad de una persona sin los requisitos legales, violarán sin duda la garantía que concede el art. 27 de la Constitucion; pero si el mismo Juez ó Gobernador ocupan la propiedad como particulares, cometerán un simple despojo. En el primer caso habria lugar al amparo, y en el segundo solo se podría intentar el *interdicto recuperandi*.

De lo dicho infiero, que las autoridades á que se contrae la ley de amparo, son á aquellos funcionarios que ejercen de por sí libremente sus actos, sin estar sujetos en sus determinaciones de una manera directa á un superior. Los otros serán empleados ó agentes públicos, ó como se les quiera llamar, pero no son propiamente autoridades.

Vengamos ahora á lo segundo. Los Jueces auxiliares á quienes se les dá tambien el nombre de cuarteleros, encargados, alguaciles ó comisarios, cree por demás decir el Promotor que no son empleados de la federacion, y no se ocupan por los mismo de ellos las leyes generales.

Las particulares del Estado, los designan con los nombres de Jueces auxiliares ó comisarios. El reglamento económico de 15 Junio de 1827, que les dá el nombre de comisarios de policía, les concede las atribuciones siguientes:

«Primera: formar el censo de su respectivo pueblo, con expresion del número de casas, nombre de la familia, estado, edad y sexo de los individuos.

Segunda: llevar un libro de las familias y personas que se avecinden en su pueblo, con noticia del lugar de su procedencia.

Tercera: auxiliar á los exatores de contribuciones en su mismo pueblo.

Cuarta: ejecutar las órdenes que emanen de las autoridades superiores, á cuyo fin se les mandarán ejemplares de aquellos que deben tener á la vista para su cumplimiento.

Quinta: cuidar del orden y quietud pública aprehendiendo á los perturbadores y mandándolos entregar á la autoridad competente.

Sesta: dar cuenta á los alcaldes respectivos de la gente viciosa y sin oficio que haya en sus pueblos.

Sétima: prestar auxilios á cualquier individuo que se los pida, para defender su persona ó intereses cuando se halle próxima y notariamente amenazado.»

Como se vé, por el texto mismo de la parte relativa del reglamento que acabo de citar, los tales comisarios de policía no ejercen jurisdicción de ninguna especie.

El art. 9º de la ley orgánica electoral, para la renovación de funcionarios municipales, de 29 de Mayo de 1869, les dá el nombre de Jueces auxiliares, y el art. 10 de la misma dice: que las obligaciones y facultades de éstos serán las que les acuerden el reglamento interior de los pueblos; pero como éste se expidió por el Congreso del Estado, con fecha posterior á los actos que se reclaman en el presente juicio, no me ocupo de averiguar qué clase de atribuciones les conceda. La tercera cuestión enunciada, es una consecuencia forzosa de las otras dos: A lo expuesto nada tiene que añadir el Promotor y concluye por lo mismo sujetando á la aprobación del Juzgado, las siguientes proposiciones:

Primera: la justicia federal, en el Estado de Coahuila, no ampara ni protege á la Sra. D^a. Luisa Ibarra, contra los actos de los Jueces auxiliares de San Juan Bautista, San Lorenzo y Colonia de San Pedro,

pertenecientes á la jurisdicción de la villa de Matamoros.

Segundo: quedan á salvo los derechos de la Sra. Ibarra, para que intente contra ellos la acción que corresponda.

Saltillo, Febrero 27 de 1871.

Es copia que concuerda fielmente con su original.

Saltillo, Mayo veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*Santos de la Garza y Gutierrez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Saltillo, Mayo primero de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos en que el C. Lic. Ignacio Galindo, apoderado general de la Sra. D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, interpone el recurso de amparo contra los actos de los jueces auxiliares de las haciendas de San Marcos, S. Juan Bautista y S. Lorenzo, propiedad de la expresada Sra., por haber violado en su perjuicio las garantías individuales que otorga el art. 16 del cap. 1º de la Constitución general de la República: visto el auto de 3 de Febrero anterior, el pedimento fiscal, las pruebas rendidas y el alegato del apoderado de la Sra. visto igualmente el parecer del C. Lic. Antonio García Cazrillo á quien éste Juzgado consultó la sentencia que era justo dar en este negocio, cuyo dictamen es como sigue:

C. Juez de Distrito:

En 12 de Enero del corriente año ocurrió á este Juzgado el C. Lic. Ignacio Galindo, apoderado general de la Sra. D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, interponiendo el recurso de amparo, contra los actos de los jueces auxiliares de las haciendas de S. Marcos, S. Juan Bautista y S. Lorenzo, propiedades de la Sra. su poderdante, que fueron ocupadas por disposición ó acuerdo de dichos jueces, desconociendo á los arrendatarios que poseían aquellas fincas á nom-

bro de la propietaria. También se queja contra el Juez auxiliar de la Colonia de S. Pedro por haber ocupado y distribuido los terrenos del rancho de la Providencia, posesión de la misma Sra. Ibarra de Zuloaga pidiendo así mismo para este caso, el amparo y protección de la autoridad federal.

El C. Lic. Galindo funda su recurso en las fracciones 1ª y 3ª del art. 1º de la ley general de 20 de Enero de 1869, y sea del art. 101 de la Constitución de la República de 5 de Febrero de 1857, por creer que los actos reclamados de los jueces auxiliares referidos, violan las garantías individuales de su poderdante e invaden la esfera y atribuciones de la autoridad federal. Lo primero, en razón á que en el acta de los derechos del hombre que forma el cap. 1º de la Constitución se le garantiza el goce tranquilo de sus haberes, estableciéndose en el art. 16 que nadie puede ser molestado en sus posesiones sino por mandato de autoridad competente, no siéndolo en este caso, conforme á las leyes, los jueces auxiliares de cuyos actos se queja. Lo segundo, por que la ocupación y distribución de los terrenos arriba mencionados, se ha hecho en el concepto de que son baldíos; y precisamente por creer los jueces auxiliares que esas tierras están vacantes, las han mandado adjudicar y repartir entre varios denunciante; cuyas operaciones están reservadas por la ley á los tribunales de la federación y el último recurso al poder ejecutivo, por la acción del Ministerio de Fomento.

El Sr. Lic. Galindo pidió al Juzgado que mandara suspender los actos reclamados, mientras se sustanciaba el juicio de amparo, por considerar que de no hacerlo así, se seguirían irreparables perjuicios á la Sra. su poderdante, cuyos arrendatarios no podían hacer sus siembras de trigo y algodón en el tiempo oportuno. Oído el informe de alguno de los jueces auxiliares á quienes se refería la queja del Sr. Galindo, y á pesar de la opinión contraria que manifestó el C.

Promotor fiscal en su pedimento relativo, el Juzgado mandó suspender los actos reclamados por auto de 8 de Febrero anterior, disponiendo que entre tanto se sustanciaba este recurso, se abstuvieran los jueces auxiliares de S. Marcos, la Colonia de S. Pedro, y S. Lorenzo de repartir los terrenos de la Sra. Ibarra e impedir á los arrendatarios el ejercicio de sus legítimos derechos.

En el informe á que acabo de referirme, rendido por el C. Catarino Figueroa, Juez auxiliar de la hacienda de S. Lorenzo, se confiesa explícitamente el hecho de haberse notificado al arrendatario D. Gabino San-Miguel, que la desocupara tan luego como levantara sus cosechas; por ser este un acuerdo tenido en junta del vecindario, y fundado en que, el arrendatario no cedía á algunas de sus pretensiones, en que hacía mucho tiempo que habían solicitado del Soberano Congreso del Estado, la erección de la Villa de S. Lorenzo, sin que se les haya concedido hasta ahora, y finalmente en que la Sra. Ibarra no ha probado su propiedad sobre los terrenos ocupados ahora por los vecinos, que según el C. Figueroa están *resueltos y decididos á llevar á cabo su determinación.*

El Juez auxiliar de la hacienda de S. Marcos, en su nota que obra á fojas 47 de los autos, contestando la orden de suspensión que se le libró por este Juzgado, manifiesta que ha notificado á los vecinos, quienes responden que aunque están dispuestos á obedecer los mandatos superiores, *no pueden obsequiar la referida disposición por importar nada menos que la destrucción de innumerables familias.*

En el término de pruebas, el apoderado de la Sra. Ibarra de Zuloaga pidió al alcalde 1º de Matamoros que le diera copia certificada de la disposición legal en que están asignadas sus atribuciones á los jueces auxiliares de los ranchos y haciendas; y en ella que es el reglamento económico político de los pueblos, de 15 de Junio de 1827,

bro de la propietaria. También se queja contra el Juez auxiliar de la Colonia de S. Pedro por haber ocupado y distribuido los terrenos del rancho de la Providencia, posesión de la misma Sra. Ibarra de Zuloaga pidiendo así mismo para este caso, el amparo y protección de la autoridad federal.

El C. Lic. Galindo funda su recurso en las fracciones 1ª y 3ª del art. 1º de la ley general de 20 de Enero de 1869, y sea del art. 101 de la Constitución de la República de 5 de Febrero de 1857, por creer que los actos reclamados de los jueces auxiliares referidos, violan las garantías individuales de su poderdante e invaden la esfera y atribuciones de la autoridad federal. Lo primero, en razón á que en el acta de los derechos del hombre que forma el cap. 1º de la Constitución se le garantiza el goce tranquilo de sus haberes, estableciéndose en el art. 16 que nadie puede ser molestado en sus posesiones sino por mandato de autoridad competente, no siéndolo en este caso, conforme á las leyes, los jueces auxiliares de cuyos actos se queja. Lo segundo, por que la ocupación y distribución de los terrenos arriba mencionados, se ha hecho en el concepto de que son baldíos; y precisamente por creer los jueces auxiliares que esas tierras están vacantes, las han mandado adjudicar y repartir entre varios denunciadores; cuyas operaciones están reservadas por la ley á los tribunales de la Federación y el último recurso al poder ejecutivo, por la acción del Ministerio de Fomento.

El Sr. Lic. Galindo pidió al Juzgado que mandara suspender los actos reclamados, mientras se sustanciaba el juicio de amparo, por considerar que de no hacerlo así, se seguirían irreparables perjuicios á la Sra. su poderdante, cuyos arrendatarios no podían hacer sus siembras de trigo y algodón en el tiempo oportuno. Oído el informe de alguno de los jueces auxiliares á quienes se refería la queja del Sr. Galindo, y á pesar de la opinión contraria que manifestó el C.

Promotor fiscal en su pedimento relativo, el Juzgado mandó suspender los actos reclamados por auto de 8 de Febrero anterior, disponiendo que entre tanto se sustanciaba este recurso, se abstuvieran los jueces auxiliares de S. Marcos, la Colonia de S. Pedro, y S. Lorenzo de repartir los terrenos de la Sra. Ibarra e impedir á los arrendatarios el ejercicio de sus legítimos derechos.

En el informe á que acabo de referirme, rendido por el C. Catarino Figueroa, Juez auxiliar de la hacienda de S. Lorenzo, se confiesa explícitamente el hecho de haberse notificado al arrendatario D. Gabino San-Miguel, que la desocupara tan luego como levantara sus cosechas; por ser este un acuerdo tenido en junta del vecindario, y fundado en que, el arrendatario no cedía á algunas de sus pretensiones, en que hacía mucho tiempo que habían solicitado del Soberano Congreso del Estado, la erección de la Villa de S. Lorenzo, sin que se les haya concedido hasta ahora, y finalmente en que la Sra. Ibarra no ha probado su propiedad sobre los terrenos ocupados ahora por los vecinos, que según el C. Figueroa están *resueltos y decididos á llevar á cabo su determinación.*

El Juez auxiliar de la hacienda de S. Marcos, en su nota que obra á fojas 47 de los autos, contestando la orden de suspensión que se le libró por este Juzgado, manifiesta que ha notificado á los vecinos, quienes responden que aunque están dispuestos á obedecer los mandatos superiores, *no pueden obsequiar la referida disposición por importar nada menos que la destrucción de innumerables familias.*

En el término de pruebas, el apoderado de la Sra. Ibarra de Zuloaga pidió al alcalde 1º de Matamoros que le diera copia certificada de la disposición legal en que están asignadas sus atribuciones á los jueces auxiliares de los ranchos y haciendas; y en ella que es el reglamento económico político de los pueblos, de 15 de Junio de 1827,

vigente al tiempo de verificarse los actos reclamados, se halla el art. 156 que dice lo siguiente:

“Son atribuciones de los jueces auxiliares: V. Cuidar del orden y quietud pública, aprehendiendo á los perturbadores y mandándolos entregar á la autoridad competente. VII. prestar auxilio á cualquier individuo que se lo pida para defender su persona ó intereses, cuando se halle próximo ó notoriamente amenazado.”

Se han examinado en el Juzgado 1º local de la Ciudad de Parras de la Fuente, obrando en representación de ese Distrito, varios testigos, que son á mi juicio dignos de toda fé, tanto por ser contestes, como por la posición social y antecedentes de cada uno. De esta información se desprenden los dos siguientes hechos, como legalmente justificados:

Primero: Que la Sra. Dª Luisa Ibarra de Zuloaga que por sus títulos de propiedad, es dueña con legítimo derecho, de la hacienda de S. Lorenzo de la Laguna, de que forman parte las de S. Marcos y S. Juan Bautista y que lo es asimismo del rancho de la Providencia, de cuyas fincas ha estado en posesión pacífica quieta y tranquila, desde que el Supremo Gobierno de la República, mandó levantar el secuestro decretado en el año de 1866.

Segundo: Que los jueces auxiliares de S. Lorenzo, S. Marcos, S. Juan Bautista y Colonia de S. Pedro, han interrumpido la posesión de la Sra. Ibarra de Zuloaga, haciendo declaraciones sobre la propiedad y repartiendo por adjudicación los terrenos pertenecientes á esas fincas de campo, de donde fueron arrojados ó desconocidos los arrendatarios que los gozaban á nombre y por contrato celebrado con la propietaria.

En virtud de otro interrogatorio presentado por el Sr. Lic. Galindo, la autoridad judicial de la Villa de Matamoros de la Laguna examinó á los arrendatarios D. Gabino San-Miguel y D. Jesus Reyna, resultando de sus deposiciones que en virtud del

contrato celebrado con la Sra. Ibarra de Zuloaga tomaron la posesión, el primero de la hacienda de S. Lorenzo y el segundo de las de S. Marcos y S. Juan Bautista, y estuvieron en quieta y pacífica posesión de ellas, disfrutándolas sin dificultad ni obstáculo alguno hasta que los jueces auxiliares de aquellas fincas les notificaron que dejaban de ser arrendatarios de la Sra. Ibarra; que si querían podían continuar sembrando como vecinos ó denunciados, ó en caso contrario separarse de las haciendas, cuyas tierras se procedió á repartir inmediatamente entre los mismos aparceros y vecinos que dependían de los Señores Reyna y San-Miguel.

En virtud del auto de suspensión de los actos reclamados y de la orden que dictó ese Juzgado relativa á cumplir aquella disposición, el Juez 1º local de la Villa de Matamoros de la Laguna en representación del de Distrito de este Estado, intentó dar posesión al apoderado de la Sra. Ibarra de Zuloaga, de los terrenos de S. Juan Bautista, y al efecto se trasladó á esta finca y al rancho de Sta. Lucía, sin que pudiera hacer cumplir las resoluciones de ese Juzgado ni dar la posesión, por haberse opuesto á ello los vecinos á quienes se han repartido las tierras ó se han adjudicado á título de baldíos. Estas constancias se registran de la foja 26 á la 30 del cuaderno de pruebas.

Segun aparece de la foja 31 á la 33 el Sr. Lic. Galindo había pedido al Gobierno del Estado copias certificadas de algunos documentos que creyó necesarios para fundar el recurso de amparo, y segun el testimonio del oficial 2º de la Secretaría C. Ramon Flores, el Sr. D. Antonio Galvan apoderado sustituto de la Sra. Ibarra de Zuloaga ocurrió frecuentemente á sacar dichos documentos sin poder conseguirlo, habiendo facilitado el papel sellado necesario para los testimonios, sin que se le extendieran; hasta que ocurrió la salida del Gobierno para el Distrito de Vieja, declarándose

cerrado el término probatorio en este negocio sin haberse presentado los documentos solicitados del Gobierno. El Sr. Lic. Galindo hizo una protesta sobre que esta omisión de la autoridad Suprema del Estado, no debía perjudicar los derechos de su representada.

Concluido el término probatorio se corrigió traslado al C. Promotor fiscal, quien en su pedimento, después de hacer un extracto de las constancias de autos, y de manifestar que en este caso no podía dejarse llevar de sus sentimientos favorables á la Sra. Ibarra de Zuloaga, sino apegarse estrictamente á las disposiciones de la ley, resume las cuestiones que se ventilan en este juicio en las tres siguientes proposiciones: 1ª ¿A qué autoridades se refiere el artículo 1º de la ley de amparo? 2ª ¿Los llamados jueces auxiliares están investidos de alguna autoridad por las leyes generales ó particulares del Estado? 3ª ¿Procede ó no el recurso de amparo?

Examinando el Sr. Fiscal la primera cuestión que se propone, manifiesta su opinión de que las autoridades á que se refiere la ley orgánica del artículo 101 de la Constitución, son "aquellos funcionarios que ejercen de por sí libremente sus actos, sin estar sujetos en sus determinaciones de una manera directa á un superior." Agrega que las palabras de la ley "cualquiera autoridad" no pueden referirse á todos los empleados de la administración, y que los actos de estos así como los de las autoridades que obran no como tales, sino en calidad de particulares, no pueden ser objeto del juicio de amparo sino del recurso que para cada caso establezcan las leyes comunes.

Después de sentar estas conclusiones, examina el Sr. Promotor fiscal la segunda cuestión que se propone, y encuentra que los jueces auxiliares no están investidos de autoridad alguna por las leyes generales de la República, y que las del Estado que les dan el nombre de comisarios de policía,

les conceden las siguientes atribuciones. 1ª Formar el censo de su respectivo pueblo con expresión del número de casas, nombre de la familia, estado, edad y sexo de los individuos. 2ª Llevar un libro de las familias y personas que se avocinden en el pueblo con noticia del lugar de su procedencia. 3ª Auxiliar á los exatores de contribuciones en su mismo pueblo. 4ª Ejecutar las órdenes que emanen de las autoridades superiores, á cuyo fin se les mandarán ejemplares de aquellas que deben tener á la vista para su cumplimiento. 5ª Cuidar del orden y quietud pública aprehendiendo á los perturbadores y mandándolos entregar á la autoridad competente. 6ª Dar cuenta á los alcaldes respectivos de la gente viciosa y sin oficio que se halla en los pueblos. 7ª Prestar auxilio á cualquier individuo que se lo pida, para defender su persona é intereses cuando se halle próxima ó notoriamente amenazada" (Reglamento económico político de los pueblos, de 15 de Junio de 1827 artículo 156.)

De estas premisas concluye resolviendo negativamente la 3ª cuestión que se propuso; manifestando, que puesto que la ley no se refiere sino á las autoridades propiamente dichas, entre las cuales no pueden contarse, á su juicio, los jueces auxiliares de las haciendas ó congregaciones, y siendo que estos, en su concepto no están investidos de autoridad alguna, la justicia federal no debe amparar ni proteger á la Sra. Ibarra de Zuloaga contra los actos de los Jueces auxiliares de S. Lorenzo, S. Marcos, S. Juan Bautista y Colonia de S. Pedro que han violado las garantías individuales de la quejosa, dejando á esta á salvo sus derechos para que los deduzca como y ante quien corresponda.

El Sr. Lic. Galindo en su alegato de buena prueba manifiesta que, en este caso cabe cordentemente el recurso de amparo, porque los agentes de la administración pública han privado á la Sra. su poderdante de la posesión de sus fincas, entregándolas

á otras personas para que las disfruten, ora á títulos de baldíos, ora negando á la Sra. Ibarra la propiedad, por lo cual ha formado su queja en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Añade, que como en concepto del mismo C. Promotor fiscal estaban probados los hechos que motivaron su queja, y á este funcionario solo le detuvo para opinar favorablemente, la idea de que los jueces auxiliares no están comprendidos en las palabras genéricas "cualquiera autoridad" que usa el artículo 1º de la ley citada, habrían bastado los informes rendidos sobre los actos reclamados para convencerse de la procedencia del recurso, pero que no obstante, ha querido aducir bastantes testimonios que acrediten la posesion pacífica en que se hallaba la Sra. Ibarra, antes de tener lugar los acontecimientos que tan irreparables daños le han causado.

Combate en seguida los fundamentos que sirven de base á la oposicion del C. Promotor fiscal creyendo que no es legítima la definicion legal de autoridad, y que por lo mismo no debe admitirse; y aun admitiendo la misma relacion de exámen de sus atribuciones que hace aquel funcionario, basta en su concepto, para demostrar que los Jueces auxiliares de las haciendas, están comprendidos en ella, y por lo mismo deben considerarse como autoridades, aunque en el último lugar de la escala administrativa. Añade que en los términos restrictivos de la definicion del C. Promotor, solo podria interponerse el recurso de amparo contra las autoridades que representan los tres poderes en que está dividido el ejercicio del poder público, cuando de las ejecutorias publicadas por los Tribunales federales, resulta que se ha concedido el amparo, aun contra los agentes de la administracion del órden inferior.

El Sr. Lic. Galindo encuentra en las mismas atribuciones que la ley señala á los Jueces auxiliares y en el texto de otras disposiciones relativas, que estos ejercen algu-

na autoridad, y que por pequeño que sea el participio que toman en la marcha de la administracion, el ejercicio de sus funciones está reglamentado, y en los actos para que están autorizados, obran por sí y no con una dependencia inmediata de sus superiores.

Hace despues el Sr. Lic. Galindo aplicacion de las pruebas por su parte rendidas, y encontrando plenamente probados los actos de que se ha quejado, no solo con las deposiciones de testigos fidedignos, sino principalmente por los informes de los mismos Jueces auxiliares de San Pedro, San Marcos, San Juan Bautista y San Lorenzo, concluye que se han violado las garantías individuales de la Sra. Ibarra su poderdante, y se ha invadido la esfera de la autoridad federal y por lo mismo debe el Juzgado ampararla y protegerla con fundamento en los art. 16, 27 y 101 de la Carta fundamental de la República.

Conclusos los autos, y habiendo citado para sentencia por el auto de 12 del corriente, se sirvió vd. consultarme la que deba dictarse en este negocio, cuyo conocimiento se ha avocado en virtud de la licencia concedida y que disfruta el C. Juez de Distrito propietario. A fin de emitir á vd. mi opinion con el mayor número posible de probabilidades de acierto, he querido formar el anterior extracto de las constancias que obran en el expediente que tengo á la vista, para que de él se desprendan de un modo claro é intergiversable, los hechos que han dado origen á este juicio y las cuestiones de derecho que es preciso dilucidar para resolverlas.

Todos los modernos publicistas han convenido en que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Los hombres se reúnen para asegurar su propiedad por medio de la ley, que la garantiza y defiende de cualquiera de los ataques provenientes de la condicion ó de la fuerza. En materia de propiedad, dice Benthon, «la seguridad consiste en no re-

cibir alguna sacudida, algun choque, alguna alteracion en la esperanza que se ha formado sobre las leyes de gozar tal ó cual posesion de bienes; y el legislador debe tener mucho respeto á estas esperanzas que él ha producido. Cuando no las contradice hace lo esencial para la felicidad de la sociedad; cuando las choca, siempre produce una suma proporcionada de mal.

La Constitucion general de la República, en su art. 1º reconoce, á nombre del pueblo mexicano, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales.

Declara en consecuencia que, todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener todas las garantías que otorga la Constitucion. Enumerando despues estas garantías, establece el art. 16, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino por mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y en el 27 declara: que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

A fin de asegurar de un modo firme el goce de tan preciosos derechos, que son la base y el objeto de las instituciones sociales, la Constitucion general creó un recurso especial en los artículos 101 y 102 para que las autoridades federales establecidas en todas los Estados de la República protejeran eficaz y brevemente á las personas cuyas garantías fueran violadas por leyes ó actos de cualquiera autoridad. De esta manera se garantizó el goce de los derechos sociales, reglamentándose por medio de la ley orgánica respectiva, á que se refiere el art. 101 de la Constitucion, y modo y las formas breves y expeditas que debian guardarse para poner á salvo las garantías individuales de cualquier ataque proveniente del poder público que hiriendo los derechos del hombre, reconocidos en el pacto social, heriría de rechazo las instituciones.

Aplicando ahora estos principios legales á los hechos que se han justificado en autos con testimonios irrecusables, se deduce claramente, que han sido violadas las garantías que en los artículos 16 y 27 de la Constitucion reconoce á la Sra. Ibarra de Zuloaga por actos de los jueces auxiliares de San Lorenzo, San Marcos, San Juan Bautista y Colonia de San Pedro. Resulta que la Sra. Ibarra es propietaria por legítimo título de las fincas mencionadas, y que ha estado constantemente en posesion quieta y pasífica de ellas, disfrutándolas por medio de sus arrendatarios; y que mantenia esa posesion al tiempo en que los jueces auxiliares referidos la interrumpieron ocupando y repartiendo los terrenos, ora á protesto de no estar probada la propiedad de la Sra. Ibarra; ora considerándola indebidamente como baldíos, tierras ocupadas y poseídas tranquilamente y durante muchos años, por un particular que las ha disfrutado sin contradiccion.

Sea cual fuere la causa que aleguen los jueces auxiliares para fundar los actos reclamados, es evidente que no llenen por las leyes la competencia necesaria para resolver sobre la posesion ó la propiedad de los individuos, aunque respecto de ellas se suscitara el litigio; y lo es tambien que no están autorizados para calificar la autoridad pública, ni para practicar los procedimientos previos á la expropiacion legal. Esto hace notorias las violaciones de garantías individuales de que se queja la Sra. Ibarra, que como antes se ha sentado, están justificadas, tanto por los testimonios que obran en autos, como por los informes de los mismos jueces auxiliares, contra quienes se ha instaurado este recurso, y que arrojan datos bastantes para considerar probados los hechos aun en opinion del Sr. Promotor fiscal.

Réstame solamente examinar y resolver la cuestion del todo expeculativa que ha suscitado este funcionario, sobre si los jueces auxiliares, contra cuyos actos se ha pe-

vido el amparo, están comprendidos en las palabras genéricas "cualquiera autoridad" de que usa el artículo 101 de la Constitución en su fracción 1ª

Confieso que á primera vista y sin detenerse en el exámen de la cuestion, tal como se presenta, me habia inclinado al parecer del C. Promotor fiscal; pero algunas observaciones de obvia aplicacion, me han hecho fundar la opinion contraria y creer que participan del ejercicio de la autoridad los agentes de la administracion pública á que se da el nombre de jueces auxiliares, y que están instituidos por la ley, en las comarcas ó poblaciones, que por sus escasos habitantes no se han elevado al rango de municipios.

Estos funcionarios, con arreglo á la ley vigente, que es la de 15 de Junio de 1827, están encargados de conservar el orden y la tranquilidad pública en su demarcacion pudiendo aprehender á los perturbadores; tienen á su cargo *ejecutar* las órdenes de las autoridades superiores, á cuyo fin se les mandan ejemplares de las *disposiciones* que han de tener á la vista *para su cumplimiento*, y finalmente están en posicion de prestar auxilio á cualquiera individuo que se los pida para defender su persona ó intereses cuando se halle próxima y notoriamente amenazada. (art. 156 del reglamento económico de los pueblos, ó sea la ley de 15 de Junio de 1827 fracciones 4ª 5ª y 7ª) siendo estas las principales facultades concedidas por el legislador á los funcionarios que designó con el nombre de jueces auxiliares, se nota claramente que participan del ejercicio de la autoridad y que les están encomendadas funciones administrativas, que aunque de un orden inferior, por las circunstancias de la comarca ó poblacion que les está encomendada; sin embargo no por eso pierden el carácter y naturaleza que le son propios.

Nadie puede poner en duda, que un agente de la administracion, sea cual fuere el nombre con que se le distinga de los demás,

que tenga á su cargo la conservacion del orden y la tranquilidad pública, en una comarca de mas ó menos extension, y en que se contenga un número escaso de habitantes, y que tenga facultades para aprehender á los perturbadores, no puede designarse con otro nombre que con el de autoridad, en la escala de sus atribuciones, y en el orden de la gerarquía ó graduacion establecida por las leyes.

La autoridad en abstracto, no es mas que el poder ó potestad que el pueblo por sí ó por medio de sus legítimos representantes, confiese á alguno ó algunos de sus individuos para obligar á todos al cumplimiento de las leyes sociales. Como es sabido, la existencia de las autoridades tan antigua como la sociedad misma, y desde que los hombres se han reunido consultando sus reciprocos intereses, y para defenderse contra los abusos de la fuerza, siempre han signado el ejercicio en uno ó mas del poder público, y desde el patriarca hasta el gobernante, la idea y el objeto de la autoridad han sido siempre las mismas, aunque la ilustracion, el estudio de las necesidades sociales y otras circunstancias diversas, hayan dado varias formas á la institucion en su creciente y progresivo desarrollo.

En la palabra "orden" está comprendido el goce de todas las garantías individuales, el respeto profundo de las leyes, y el cumplimiento exacto de sus prescripciones; así es que, los encargados de conservar el orden en una sociedad determinada, ejercen precisamente la autoridad, porque de lo contrario no tendrían el poder bastante para hacer cumplir sus determinaciones relativas á la seguridad pública, ni menos estaria en su posibilidad aprehender á los perturbadores, y sofocar en este modo sus aspiraciones. La tranquilidad pública que envuelve una idea menos extensa que la de orden, tampoco podria mantenerse sino por la fuerza ó por la autoridad, sirviéndose ésta del prestigio moral que la rodea siempre en los pueblos cultos. La tranqui-

lidad pública es el sociólogo que alimenta la esperanza, fundada en las leyes; de conservar y disfrutar los intereses particulares sin alarmas ni inquietudes, y por la misma naturaleza de las cosas como su conservación, está exclusivamente á cargo de las autoridades.

La disposicion que encierra la fraccion 4.^a del mismo art. y la ley citada, ayuda tambien á interpretar su espíritu de la misma manera. Se encarga á los jueces auxiliares el cumplimiento de las leyes y órdenes de las autoridades superiores á ellos; y tanto la gravedad del encargo que se les hace, como la relacion que se establece entre estos funcionarios y los de un orden superior, demuestra hasta la evidencia, que están investidos de la autoridad y la ejercen en su pequeña demarcacion bajo los límites que la misma ley señala á sus atribuciones.

No les seria posible ejecutar las órdenes comunicadas por la superioridad, ni dar cumplimiento á las disposiciones legales de que se les remiten ejemplares, conforme á la ley, sino tuvieran el poder bastante para obligar á los demás á obedecerlas; y nada ótra ótra cosa significa este poder, que el ejercicio de la autoridad.

Tambien la fraccion 5.^a del citado artículo 156, revela que los funcionarios á que se refiere, participan de la autoridad.

Deben los jueces auxiliares prestar auxilio á cualquiera individuo que se lo pida para defender su persona ó intereses, cuando se halle próxima ó notoriamente amenazada. Y para cumplir estos funcionarios con tal obligacion, necesitan poner en ejercicio el poder de obligar á los demás habitantes de su comarca, á fin de hacer eficaz el auxilio solicitado; y esto importa precisamente las funciones características de la autoridad.

Seria absurda la ley que estableciera funcionarios, á gentes de la administracion, obligados á procurar el cumplimiento de las leyes y la conservacion del orden y tran-

quilidad pública, sin investirlos del poder suficiente para llenar sus deberes, ni crear á su derredor la respetabilidad y el prestigio de la autoridad. Los jueces de las haciendas y congregaciones, constituidas de esta manera, se hallarian nulificadas en el ejercicio de sus atribuciones, porque sin potestad para obligar á los habitantes de su demarcacion á ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de las leyes para la conservacion del orden, ó para prestar los auxilios requeridos, su accion propia y limitada, jamás bastaría para llenar el texto y el espíritu de las prescripciones legales que acabo de citar en cuanto á los funcionarios que les incumbe. Y ya he dicho, que á mi juicio esta potestad de obligar á los demás, es el sello característico de la autoridad.

No puede hacerse una comparacion fundada, entre los jueces auxiliares de las haciendas y congregaciones y los empleados propiamente tales, que por la naturaleza de sus ocupaciones y carácter de los asuntos que les están encomendados, no ejercen jurisdiccion alguna, ni tienen atribuciones propias de la autoridad.

Los CC. ocupados por la administracion en las oficinas públicas y los que forman un cuerpo inmediatamente sujeto á su superior, que no hacen mas que desempeñar funciones ajenas de la autoridad ó ayudar á esta, obedeciendo sus órdenes, no tienen atributo alguno jurisdiccional, y no pueden por lo mismo equipararse á los funcionarios que, como lo he demostrado, tienen señaladas por la ley facultades tales, que requieren pensamiento para su aplicacion, el ejercicio del poder encaminadas á violar los derechos del hombre ó á extraslimitar la esfera señalada á cada uno de los tres poderes en que está dividido el ejercicio de la administracion.

De esto se infiere que deben interpretar, se ampliamente, en caso de duda, el texto de la fraccion 1.^a del art. 101 de la Constitucion por ser á todas luces favorable el

recurso que establece en beneficio del pueblo y para asegurar el cumplimiento del pacto social. "Favorabilia ampliando, odiosa restringendo" es el principio de derecho que tiene mas frecuente aplicacion en los casos en que se trata de interpretar las palabras oscuras de las leyes.

Tratándose la cuestion que se ha sujetado á un exámen de saber si los jueces auxiliares que han violado las garantías individuales de la Sra. Ibarra de Zuloaga, cuyas propiedades han mandado ocupar y repartir sin apariencia legal, están comprendidos en las palabras genéricas "cualquiera autoridad" de que usa el art. 101 de la Constitucion, aunque con los fundamentos que he aducido en el cuerpo de este dictamen, creo haber demostrado que estos funcionarios son autoridades colocadas en el órden inferior de la jerarquía ó graduacion establecida por las leyes; sin embargo, todavía en el caso de duda fundada conforme al principio que acabo de citar, debería ampliarse el texto de la fraccion 1ª comprendiendo en él los actos de los jueces auxiliares de las haciendas ó congregaciones. Lo contrario equivaldría á sancionar el abuso por un escrúpulo de forma y á dejar pasar sin pronto correctivo un atentado evidente, por entretenernos en una cuestion especulativa sobre la dudosa significacion de un vocablo.

La misma palabra "cualquiera" de que usaron los legisladores, está manifestando que se quiso dar una ampliacion latísima al recurso de amparo, con el fin de cortar prontamente los males que pudieran ocasionarse por leyes ó actos de cualquiera autoridad, que violen las garantías individuales, lo mismo que por leyes de los Estados ó de la federacion que invadan recíprocamente la soberanía de aquellos ó la esfera de la autoridad federal.

La naturaleza y el objeto de esta institucion, así como los términos genéricos usados en la tantas veces citada fraccion 1ª del art. 101 de la Constitucion, ayudan

mucho á interpretar en un sentido amplio y favorable y corroborar la idea de que en su espíritu están comprendidos los actos de los funcionarios de un órgano inferior establecidos en las haciendas ó congregaciones de pocos habitantes que en el Estado tienen el nombre de jueces auxiliares.

Cualquiera que sean los demás recursos legales que con arreglo al Derecho común pueda ejercitar la Sra. Ibarra de Zuloaga, ante los tribunales del Estado, no impiden que escoja el medio mas expedito y mas eficaz, á su juicio, para remediar los males de que se queja y que le han ocasionado las autoridades cuyos actos violan las garantías que la ley le reconoce.

Es un principio de Jurisprudencia, el de que, teniendo dos ó mas recursos para deducir un derecho, se goza la libertad de escoger el que sea mas favorable ó mas convenga por cualquiera consideraciones á la persona interesada. Así es que en este caso, la idea del Sr. Promotor fiscal de que la Sra. Ibarra de Zuloaga ha podido entablar el interdicto de despojo para recuperar sus propiedades, si bien es cierto, no excluye el derecho y la libertad de la interesada para instaurar el juicio de amparo que creyó mas expedito, de formulas mas breves y mas á propósito para conseguir su objeto, que era evitarse los daños y perjuicios que le sobrevendrían si no volvían las cosas al estado en que se hallaban con la prontitud requerida por la naturaleza y circunstancias del caso.

Por todas las razones expuestas y con fundamento en los artículos citados de la Constitucion General de la República, opino que la justicia federal debe amparar y proteger á la Sra. Ibarra de Zuloaga contra los actos de los jueces auxiliares de S. Lorenzo, S. Marcos, S. Juan. Bautista y Colonia de S. Pedro, que violaron las garantías individuales que reconocen al hombre los artículos 16 y 27 de la ley Suprema de la Nacion.

Saltillo, Mayo primero de mil ochocien-

tos setenta y uno.—Lic. Antonio G. Carrillo.

Y Considerando: que las conclusiones que propone acerte el Juzgado, están plenamente justificadas, en el cuerpo de su dictamen, con fundamentos de los artículos 101, 102 de la Constitución y 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, debía fallar y falló.

Primero: Por los fundamentos del dictamen del expresado Lic. Carrillo, la justicia de la Union ampara y protege á la Sra. D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, contra los actos de los jueces auxiliares de S. Lorenzo, S. Marcos, S. Juan Bautista y Colonia de S. Pedro que violaron las garantías individuales que reconocen al hombre, los artículos 16 y 27 de la ley Suprema de la Nacion.

Segundo: Hágase saber esta resolución publicándose en el Periódico Oficial con insercion del dictamen que sirvió de fundamento, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la ley y notifíquese.

El C. Juez 3º Suplente de Distrito definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó. Por ante mí. Doy fé.—*Juan Venegas.*—*Florentino Seguin*, secretario.

Es copia que certifico. Saltillo, Mayo veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.—*Florentino Seguin*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Ignacio Galindo, en representacion de la Sra. D. Luisa Ibarra de Zuloaga ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, contra los actos de los Jueces auxiliares de las Haciendas de S. Marcos, S. Juan Bautista y S. Lorenzo, que fueron ocupadas por disposicion de los referidos Jueces,

desconociendo ademas á los arrendatarios de esas fincas; y contra los actos del Juez auxiliar de la colonia de S. Pedro que ocupó y distribuyó los terrenos del rancho de la Providencia. Considerando: que dichos actos importan la violacion de las garantías á que se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma el auto pronunciado el primero de Mayo proximo pasado por el Juzgado de Distrito de Coahuila, que declara: que la Justicia de la union ampara y protege á la Sra. D^a Luisa Ibarra de Zuloaga, contra los actos de los Jueces auxiliares de S. Lorenzo, S. Marcos, S. Juan Bautista, y colonia de S. Pedro que violaron las garantías que reconocen al hombre los artículos 16 y 27 de la ley Suprema de la Nacion.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron lo Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M^a Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.